

2

UNA CULTURA DEMOCRATICA

REFUNDAR una democracia estable en Chile, en medio de una crisis económica prolongada y con la amenaza siempre presente de revivir un pasado traumático, es una tarea cuya dificultad no puede ni debe ocultarse.

La crisis es una oportunidad sólo en la medida en que se esté dispuesto a llegar al fondo de los problemas nacionales; a mirar la realidad tal cual es, por dolorosa que sea. La auto-crítica es un proceso por el que hay que pasar para estar en condiciones de abrirse a un futuro con una mirada fresca, y

sin aferrarse excesivamente a creencias, dogmas o prejuicios del pasado.

Las instituciones democráticas que surjan, las nuevas reglas de convivencia, o las formas que adopte la resolución de los conflictos no podrían funcionar en un sustrato de recíprocos resquemores y desconfianzas exacerbadas, que son muy propias de una sociedad dividida y polarizada. Hay que comenzar, entonces, reemplazando ese sustrato por un conjunto de elementos que deberían contribuir a la constitución de una sólida cultura democrática. En este capítulo analizaremos algunos aspectos que, nos parece, tendrían que formar parte de ella.

RENOVACION DE LAS IDEAS Y DEL ROL DE LOS INTELECTUALES

No cabe duda de que Chile tiene que comenzar por desentrañar la enorme confusión en que se encuentra. El gobierno se aferra al poder, sin ser capaz de convencer al país de la necesidad de su permanencia. Tanto aquella fracción de la clase dirigente que no participa del gobierno como el hombre común se debaten entre la preocupación por el presente y una búsqueda, a ratos angustiada, de los mecanismos que permitan revertir la situación, lo que significa, en primer lugar, el reemplazo del régimen autoritario por un sistema de corte democrático. ¿Qué viene después? Aunque las líneas gruesas han sido perfiladas por las fuerzas democráticas más representativas, es indudable también que todavía falta hacer un gran esfuerzo para aclarar el camino; para articular una visión de país posible.

Chile es un país que desde siempre asignó una gran importancia a las ideas. En razón de esa historia, y de las características propias de un período de transición, la sociedad es, y seguirá siendo en adelante, bastante permeable al mundo de las ideas. Ideas respecto de sí misma y del futuro. Aquí siempre se valoró el aporte de la inteligencia, tal vez por tratarse de un país con cultura de clase media en que la adscrip-

ción a los sectores medios se logró, más que por el dinero, precisamente por la educación. De allí esa verdadera obsesión nacional por la educación, que se expresó históricamente en que cuando los grupos medios accedieron al poder con los gobiernos radicales, el país terminó expandiendo y mejorando su sistema educativo hasta convertirlo en uno de los mejores de América Latina.

Es por ello que los intelectuales siempre tuvieron un lugar privilegiado en Chile. Su gravitación, no obstante, se reforzó desde fines de la década del cincuenta. Ubicados en un sistema universitario autónomo, estable y profesionalizado, que proveía de un espacio real para el trabajo en la ciencia y las artes, a partir de ese período los intelectuales influyeron decisivamente en la vida del país, ejerciendo un rol público en la formación de la cultura y especialmente en la creación de una conciencia social. La imagen que cualquier intelectual quería tener de sí mismo se resumía en la aspiración de ser "conciencia crítica de la sociedad".

A diferencia de lo que ocurría en otros países latinoamericanos, el intelectual chileno no era rápidamente cooptado por el sector público (como en México), o por el sector privado (como ocurre, tal vez, en Colombia o Venezuela). En Chile el intelectual tenía una posición estamental asegurada en la universidad, sin la correlativa responsabilidad derivada de una eventual puesta en práctica de sus ideas. Estaba exento, por lo tanto, de la necesidad de cotejar sus posibilidades de aplicación dentro de un marco concreto de restricciones políticas y de recursos como las que enfrenta cualquier país en desarrollo.

Desde esa posición de relativa autonomía y seguridad laboral, el intelectual chileno se fue vinculando con el poder detentado principalmente por los medios de comunicación masiva y los partidos políticos. Su forma de conexión con ellos fue compleja. Por un lado, el intelectual asumió un rol que lo convirtió en un productor de ideología: desde su ámbito académico construyó teorías de transformación de la sociedad, las que difundió después, apresuradamente, tanto en el seno de

los partidos como a través de las amplias tribunas que ofrecían algunos medios de comunicación.

Esta producción de ideas “en el vacío” —en el sentido de que se trataba, básicamente, de elucubraciones teórico-ideológicas— alimentó la retórica de los partidos y dogmatizó a la prensa, influyendo decisivamente en el carácter y en el contenido del discurso político que prevaleció durante los últimos veinticinco años. A menudo este discurso se hizo abstracto, teorizante, plagado de diagnósticos tajantes y de soluciones dogmáticas, globales y autocontenidas.

La tentación para el intelectual era grande. Desde su esfera resguardada podía llegar a influir sustantivamente la “agenda pública” a ser discutida por la sociedad y, desde luego, por los partidos. Su influencia dentro de éstos, asimismo, aumentaba en la medida en que era capaz de articular las visiones teórico-globalizantes de quienes controlaban el aparato partidario o de quienes moldeaban la opinión pública a través del control de ciertos medios de comunicación. Se dio así la paradoja de que el intelectual, gran propugnador de los cambios para la sociedad, se convirtió en un factor de refuerzo de las creencias, a menudo rígidas y dogmáticas, existentes al interior de los partidos y de la élite dirigente que controlaba la prensa. Ayudó, de este modo, a congelar el pensamiento; no a renovarlo. El profeta de los cambios se convirtió, respecto de su propio pensamiento, en un conservador.

Las consecuencias de esta interacción entre intelectuales, políticos y formadores de opinión no fueron triviales. En la medida en que los primeros se adecuaron a los segundos —en cuanto productores de ideas que sólo reforzaban ideologías— el pensamiento social y político tendió, tal como los partidos, a burocratizarse. La prensa se hizo rígida y dogmática. La carrera política de un intelectual era función de su adhesión a una ortodoxia, no de su capacidad de renovar, de “ventilar” ideas.

Es interesante observar que estos fenómenos, que en cierto sentido podrían asumir el carácter de un oportunismo inte-

lectual, no eran exclusivos de nuestro medio ni se daban sólo entre intelectuales y políticos. Harry Johnson, mordaz, ácido y brillante economista de la escuela de Chicago, describe en un artículo cómo se hace carrera en la profesión de economista académico de EE.UU.: arrimándose a alguna figura universitaria establecida y conformando la propia contribución intelectual a refinamientos de detalle respecto del paradigma del maestro. Este se interesa, hace publicar en prestigiosas revistas la contribución del discípulo, con lo que éste asegura sus credenciales (“publicar o perecer”) para avanzar su carrera. La consecuencia, como en el caso que comentamos previamente, es un refuerzo sistemático del pensamiento ya establecido, lo que explica tal vez el carácter tan conservador de la ciencia económica en los EE.UU.

En el caso chileno, el intelectual —como transmisor y amplificador de verdades recibidas desde los partidos o desde “escuelas de pensamiento” como la de Chicago— terminó involucrado y confundido en el mismo proceso de radicalización y confrontación, excluyente y destructiva, que caracterizó a la vida política en la fase inmediatamente anterior al quiebre democrático.

Perdió así su distancia frente a la sociedad y frente a sí mismo, es decir, la libertad interior necesaria para analizar objetivamente a la sociedad y sus procesos. Dilapidó, por lo mismo, su posibilidad de aportar a una ampliación de la capacidad de acción y de los grados de libertad de la sociedad, contribuyendo objetivamente a reducirlas. Bastante a menudo el intelectual optó por desempeñar un papel ideológico-profético que contribuyó a confundir y a rigidizar, más que a aclarar y flexibilizar, los caminos del país.

Una cultura democrática tiene que plantearse este problema, en parte porque este tipo de intelectual fue, al fin de cuentas, producto de un determinado sistema educativo. Una educación para la democracia, desde el nivel primario hasta el de la educación superior, tiene que apuntar a cambiar y renovar la forma en que los futuros intelectuales van aprendiendo a reflexionar sobre su sociedad. Desde el énfasis *excesivo* en el eje “doctrina-

ideología”, parece necesario moverse al examen objetivo de la realidad como punto de partida de la reflexión intelectual.

La formación del pensamiento tendría que ser más tentativa, menos rígida, más abierta. Menos autocontenida y con mayor referencia a la realidad. En una palabra, más científica. La ciencia se caracteriza por construirse sobre la base de verdades parciales, las que siempre se someten al escrutinio crítico de los pares. Se trata de verdades que se van modificando, rechazando o perfeccionando en una interacción honesta, abierta y constructiva con otros. Esto ocurre así no porque no se tenga un juicio sobre las cosas ni tampoco por “pragmatismo”, sino debido a la complejidad del mundo real que se estudia.

La educación del intelectual, en su sentido más profundo, tendría que parecerse más al proceso de conocimiento científico: el fruto de su trabajo debería ser un producto “incompleto”, una verdad por conocer y elaborar en un proceso permanente; en un ir y venir de las ideas acerca del país, de la sociedad y sus problemas; en una sistemática confrontación con la realidad.

Nuestros intelectuales, en relación a sus pares en otros países, aparecen a menudo como excesivamente normativos y defensivos en su actitud académica. Son sin duda más rígidos y, por cierto, significativamente más ideológicos. Exhiben una tendencia manifiesta a preferir las grandes construcciones teóricas o doctrinarias más que la contribución parcial, de alcance más limitado pero más referida a la realidad concreta observable que alimenta la cultura científica en otros países, incluso de América Latina.

En Chile necesitamos élites intelectuales más dialogantes y abiertas frente a quienes representan otros enfoques, otras visiones del mundo y de las cosas. Requerimos de nuestros intelectuales una disposición más favorable a una interrelación permanente con la comunidad científica internacional; más humildad para aprender de otras experiencias y realidades.

Tal vez ahora más que antes el intelectual tiene en Chile una obligación de responsabilidad en lo que plantea. Una dimensión de esa responsabilidad significa, por ejemplo, enfa-

tizar las limitaciones y las restricciones dentro de las cuales inevitablemente se desenvolverá el futuro del país.

En la hora presente el papel del intelectual debiera ser como un reverso de la actitud del pasado, el de bajar la retórica y las ilusiones y llevar pedagógicamente al país en su conjunto a enfrentar su realidad limitada y constreñida para, sólo a partir de allí, buscar un camino posible. El intelectual tiene como tarea extender la esfera de la racionalidad; estar más del lado de los que saben y no sólo funcionar como un articulador de los que mandan o de los que piden. Esa es la tarea principal de un intelectual comprometido con el futuro democrático del país.

Por esta vía será posible ir alimentando —desde la esfera de la cultura— una flexibilización de los comportamientos políticos. La sociedad civil chilena necesita, por otra parte, de más autonomía y más plasticidad para crear las nuevas instituciones y formas de convivencia que serán necesarias para enfrentar la etapa del futuro. Se necesita atenuar el control que ejerce la clase política a través de planteamientos cerrados y globalizantes, y más libertad para que la gente piense más allá de los márgenes de un esquema intelectual y se asocie de acuerdo a intereses cruzados que no siempre se conforman al eje doctrinario-político. Ese parece ser un requisito esencial para la vitalización de la sociedad civil frente al Estado y para la renovación —en lo profundo— de la democracia en Chile.

LA RENOVACION DE LA POLITICA

En estos años de dictadura la política ha asustado a mucha gente. No han querido asociarse a ella, la han rehuído con temor. Para el régimen autoritario la política ha sido siempre sinónimo de guerra. En su lenguaje y expresiones públicas siempre ha estado presente la noción de “enemigo interno”. La acción política del régimen se ha configurado como un constante movimiento estratégico tendiente a la aniquilación del enemigo. Aceptada la lógica de la guerra, todo lo demás

se le subordina. Se falsifica el lenguaje: la dictadura es la libertad; la dictadura es la democracia. Para algunos, "la guerra es el arte de la impostura y de la falsedad".

La preponderancia de la lógica de la guerra es la que hace tan difícil, casi imposible, la liberalización política y los acuerdos con quien detenta el poder. Ello es lo que resta movilidad política y, de hecho, deja entrampada a una fracción significativa de la derecha y del mundo empresarial en la esfera de influencia del régimen autoritario.

La lógica de la guerra en la política no es monopolio exclusivo de la dictadura. Estuvo en germen en la política chilena desde los años cincuenta y floreció en algunos grupos políticos durante el gobierno de la UP.

La renovación de la política tiene que comenzar por una superación de esa lógica. La política en la democracia, y también antes de ella, tiene que medirse por su capacidad de ceder, de negociar; por su voluntad permanente de buscar acuerdos, sacrificando parte de las propias posiciones.

Renovar la política supone también renovar los temas de los cuales se preocupan los políticos. Después de las experiencias autoritarias la política tiende, a menudo, a recomenzar donde quedó antes del quiebre. Siempre una dictadura produce una cierta congelación de los liderazgos y de los temas. Se tiende, casi por inercia, a revivir los conflictos del pasado. Las primeras confrontaciones públicas están cargadas de esa memoria histórica, como si se tratara de acontecimientos y de preocupaciones recientes. Resurgen los antagonismos. Se tiende a pelear las batallas del pasado, con las tácticas del pasado y esgrimiendo "verdades" congeladas.

Nadie sufre más de estos síntomas que los propios partidos políticos, especialmente cuando el régimen autoritario los obligó a replegarse en sí mismos, reafirmando sus creencias y sus símbolos comunes como forma de supervivencia.

Renovar los temas de la política significa innovar en los enfoques ideológicos, en la visión del mundo, en el proyecto histórico concreto que cada partido le ofrece al país. Se trata de incorporar las lecciones de la crisis y de introducir el tema

del reencuentro nacional en las reformulaciones ideológicas y programáticas correspondientes.

La renovación de la política requiere, además, de la modernización de los partidos. Chile desarrolló en el curso de este siglo una verdadera partitocracia, una clase política poderosa y con tendencia a cerrarse en sí misma que elaboraba su propio lenguaje, insuficientemente conectado con otro lenguaje, el de la sociedad; el de las situaciones concretas de vida. De allí la crítica constante que el ciudadano corriente dirige a "los políticos" y la constatación de que existe una brecha entre el mundo político y el de la vida cotidiana de los ciudadanos.

Los partidos controlaban y, en último término, manipulaban a las organizaciones sociales a través de un complicado proceso de cooptación clientelística seguido del manejo, disciplinamiento y subordinación de dichas organizaciones a las órdenes de la "tienda" dominante. Esto restó autonomía y, desde luego, creatividad a las asociaciones intermedias en la sociedad, reduciéndolas gradualmente a funcionar casi como meros apéndices.

La politización llegó así a todas las células y organizaciones de la sociedad civil. Como la política era, por otra parte, divisiva, fraccional y antagónica, el proceso contaminó con esos síntomas hasta los pliegues más recónditos del tejido social. Y comenzó, sin buscarlo, a preparar a la sociedad civil para la guerra.

Otras dos características de los partidos contribuyeron a acentuar la deformación. La primera fue la configuración en torno a ellos, de verdaderas subculturas articuladas como comunidades relativamente cerradas, defensivas y no desprovistas de sectarismo. Al interior de estas subculturas, los militantes buscaron desarrollar expresiones distintivas que perfilaron una especie de identidad común en casi todos los planos: se compartía, en cotos cerrados, la cultura, las actividades recreativas e incluso la preocupación educacional por los hijos. Estos rasgos de subcultura se encarnaron en las cuatro o cinco principales corrientes políticas chilenas. Y naturalmente el

proceso tendió a acentuar la segmentación política de la sociedad, porque dichos partidos no fueron capaces de encontrarse en torno a una cultura democrática común.

Una segunda característica fue la existencia de un régimen de partidos fuertemente competitivo y polarizado. Cada partido competiría fieramente con las otras fuerzas. Para captar apoyos recurría a demandar más que los otros, a ser más radicalizado en sus posturas, a ir siempre más allá, lo que al final derivó en la idea, que llegó a generalizarse, de que "no es posible cambiar nada si no se cambia todo".

Este tipo de comportamiento político es el que explica que el sistema de partidos en Chile haya llegado a ser, en los años sesenta y setenta, uno de los más polarizados del mundo, en un mismo grupo con la República de Weimar, con la República española y con la Cuarta República en Francia, regímenes todos que desembocaron en experiencias autoritarias.

Para renovar la política en este contexto de polarización es imprescindible insistir en el necesario desarrollo de dos nuevos rasgos de cultura política: primero, la importancia clave de superar la visión de que en política sólo es posible ganar a expensas de otro. Esta visión ignora totalmente la perspectiva de que, a través de la cooperación, se hace factible que todos ganen a partir de una relación política más constructiva. Que mejoren la calidad de la convivencia y, seguramente también, los beneficios y frutos del desarrollo a los que pueden acceder.

Un segundo rasgo es el valor de la moderación en política. La moderación no debería convertirse nunca, dentro de la cultura política de un país, en síntoma de debilidad, como durante largos pasajes de nuestra historia reciente parece haberse entendido. Antes bien, ese valor es un reflejo de la fuerza y claridad de las propias convicciones y de la posibilidad, por tanto, de poner en juego las ideas apelando a la razón y a la persuasión.

La renovación de la política supone plantearse también el conflictivo tema de la relación entre los partidos y las organizaciones sociales. Esta siempre será una relación difícil, especialmente cuando los partidos se han acostumbrado a controlar

las organizaciones. Las centrales sindicales están entre las entidades que más resienten este trato condescendiente y a veces manipulativo de los partidos políticos respecto de ellas.

Así como se requiere de partidos menos ideológicos, más programáticos y más flexibles, se necesita también de organizaciones sociales que sean más autónomas de los partidos. Ellas no pueden ni deben sustituir a los partidos porque por definición representan intereses corporativos y, por tanto, parciales. Por su parte, son precisamente los partidos políticos los encargados de articular visiones o proyectos verdaderamente nacionales. En su capacidad de lograrlo se juega, por lo demás, su potencial electoral. La relación mutua es de por sí compleja y conflictiva. Los partidos y las organizaciones se necesitan recíprocamente pero se disputan con ardor una zona gris de influencia recíproca que desean controlar, con lo que se da entre ambos lo que Cardoso ha llamado una dialéctica incompleta.

Debiera ser posible discutir abiertamente el problema entre los dirigentes de uno y otro sector, hasta encontrar una forma de interacción que, respetando las respectivas esferas de acción, preparara el terreno para el desarrollo de una práctica recíproca de diálogo y consultas permanentes. Sin un desarrollo en este sentido, la concertación social se convertiría en un mero slogan, vacío de contenido.

Por último, la forma de hacer política tiene que adecuarse a los requerimientos de una situación de crisis histórica, de hito fundamental, de encrucijada, como la que describe la realidad chilena hoy día. Para convertir la crisis del país en una oportunidad, la renovación se hace imprescindible.

No es posible ignorar, por una parte, que la política es un mecanismo natural para adquirir poder. Eso forma parte de su esencia. Sin embargo, cuando la política es sólo esto, tiende a vaciarse de contenido. Deja de ser inspiradora, movilizadora de voluntades. Eso puede ser eficaz en períodos históricos en que sólo hay que administrar un cierto orden político o económico-social consolidado y probado; consensual y hegemónico. La política en los países industriales se asemeja bastante a esa

versión: los partidos operan allí como máquinas destinadas a conquistar el poder y ejercerlo.

Pero, en sociedades en que la modernidad y la integración nacional están por conquistarse, el problema fundamental es movilizar voluntades e inspirar esfuerzos colectivos que desencadenen el proceso de desarrollo y de modernización. La fórmula de desarrollo de cada país dependerá de un sinnúmero de factores histórico-culturales; de la dotación de recursos, etc. No obstante, en último término, la organización del proceso movilizador dependerá de la calidad del liderazgo político.

En las democracias, este liderazgo se ejerce a partir de los partidos y del proyecto nacional que sean capaces de proponer. Pero, sobre todo, depende de su capacidad de motivación, de apelar a la capacidad del ciudadano para trascenderse en una tarea que vaya más allá de sí mismo. Un proyecto así plantea a menudo la necesidad de diferir gratificaciones personales legítimas en función de la idea de aportar a una construcción colectiva, la del propio país. Tal motivación tiene que ser poderosa, porque ella implica trabajar para el futuro más que para el beneficio inmediato.

Un sentido de desapego frente a la política como mera maquinaria de poder es necesario, también, por lo que Medina Echeverría formuló con concisión: "Los hombres son incapaces de vivir sin algún estímulo de ejemplaridad". Por eso, la política que sólo es poder tiende —en ausencia de otros elementos— a rebajar, hasta envilecer y a veces hasta corromper incluso a quienes la ejercen. Por eso, los mismos que —manipulados— se suman a ella tienden a rechazarla a la larga, y a quienes la encarnan.

La política debe descansar en una base moral para tener una capacidad de transformación profunda de la sociedad. Paradojalmente, mientras más apela al desinterés, al espíritu de servicio, al desafío de extenderse hacia los demás —tomando distancia efectiva respecto del cálculo político inmediato—, más exitosa es en cuanto a su capacidad de atraer y de captar la imaginación y, en definitiva, el apoyo ciudadano.

La política orientada profunda y auténticamente en función del país, y sus urgencias, genera credibilidad y confianza. La capacidad de conducir se apoya, en definitiva, en el valor intangible que emana de la actitud de la gente para creer en quienes quieren ser sus conductores.

En el horizonte concreto de un país que sale del autoritarismo el fundamento moral de la política adquiere especial importancia. En estas situaciones se hace imprescindible asumir el dolor colectivo, las heridas del pasado, para ser capaces de convertir todo eso en una fuerza constructiva. Por otra parte, ¿cómo se podría cohesionar una sociedad desintegrada y dividida y con una dramática escasez de recursos, si no es apelando a los valores que se compartirán en la nueva institucionalidad democrática que se constituye?

Consideremos, por un momento, las implicaciones de la escasez de recursos que es consecuencia de la crisis de la deuda externa. Sería mentirosa y carente de ética una política que, en esas circunstancias, utilizara como instrumento para adquirir poder político, personal o colectivo, la exacerbación de las demandas de consumo reprimidas en la población: esas demandas no podrán ser satisfechas luego, a menos que se desencadene un esfuerzo colectivo en pos del aumento de la producción y de la productividad.

La política democrática podrá ofrecer, y en abundancia, bienes no económicos como la recuperación de la dignidad, del autorrespeto, de las libertades y los derechos, del orgullo de pertenecer a una nación y no a un territorio sometido; del sentido de que se es útil para algo constructivo, que se aporta a un bien colectivo, que se es considerado y respetado por lo que se es. Pero no podrá ofrecer, y la ética exige decirlo crudamente, un mundo de bienestar económico fácil.

LA ESTRATEGIA PARA LOS CAMBIOS

Hacíamos referencia —en una sección anterior— al cansancio del país con los cambios. Eso representa un dilema real. Una

sociedad que no cambia se recarga de tensiones internas y se desgasta en disputas estériles, que la paralizan y matan en su creatividad.

Por otra parte, las instituciones que se muestran incapaces de evolucionar contagian de esclerosis al cuerpo social y se hacen, en definitiva, ineficaces para los propios fines por los que fueron creadas. Le ocurre a los partidos políticos que no se renuevan, a las universidades que se burocratizan, a los gobiernos que se aferran al poder y no se adaptan, y a las empresas que ahogan sus procesos de innovación y renovación.

El cambio es, pues, inevitable. ¿Cómo impedir que éste se haga destructivo; cómo evitar que conduzca como desenlace a un retroceso en lugar de un progreso social?

En primer lugar, el cambio no puede consistir en un proceso abierto, sin límites; y eso es válido particularmente después de un largo ciclo de transformaciones estructurales que tuvieron precisamente esas características. El riesgo de no ponderar esa dimensión es consagrar, como hemos visto, por ejemplo, la inestabilidad y la inseguridad como características permanentes del orden económico.

En segundo lugar, y en sentido inverso a la visión superficial, los cambios no pueden imponerse a sola voluntad, por mucho que sea el poder de que se disponga. Esa lección debería estar asimilada, incluso por los economistas de Chicago y hasta por el propio Pinochet.

En cualquier sociedad compleja el cambio provoca la reacción de sectores que empujan en direcciones diversas. En ese sentido, la transformación en desarrollo es una especie de proceso de adaptación recíproca entre quienes la inician y los que son objeto de ella, ya sea que la resistan o que adhieran. El resultado final es necesariamente distinto al esperado a priori.

Considérense, por ejemplo, los cambios producidos en la estructura agrícola del país a partir de la Reforma Agraria de Frei y la cadena de reacciones y efectos que ella desató: la radicalización política de los agricultores en tiempos de Frei; la posterior necesidad del allendismo de plantear cambios más revolucionarios como una forma de competir y sobrepasar

los planteamientos de la DC; la reacción de una derecha que empujó el golpe al sentirse amenazada en intereses vitales por la UP y que terminó impulsando, desde el poder, una contra-reforma parcial en el agro; la situación actual de una agricultura con menos latifundio y más comercial, pero sostenedora también de un importante remanente de economía campesina empobrecida.

Al iniciarse el proceso de cambios en el agro, en 1965, nadie pudo prever esta secuencia de reacciones concretas ante un estímulo que apuntaba cabalmente en otra dirección. El resultado final no es más que la consecuencia de una sucesión de reacciones complejas e interdependientes de todos los otros actores, directa o indirectamente involucrados en el proceso.

Consideremos, en otro plano, los intentos de la oposición al régimen autoritario por producir una movilización social masiva como instrumento de cambio del gobierno. El proceso de movilización no ha carecido de voluntad política y ni siquiera del apoyo de la ciudadanía ni de las organizaciones sociales, donde la adhesión es abrumadoramente mayoritaria. ¿Por qué no logra entonces más plenamente sus objetivos? ¿Por qué en algunos momentos, incluso retrae y repliega a grupos claves como los sectores medios en lugar de movilizarlos? La explicación se encuentra en la complejidad de la situación, atravesada por una red de interacciones múltiples: las acciones represivas del gobierno, el miedo a ellas que exhiben algunos actores centrales, el temor al desborde social que albergan otros; la violencia ejercida por grupos radicalizados que terminan atemorizando, incluso, a algunos de los gestores de la estrategia original.

Una vez iniciado el proceso, entonces, la voluntad de cambio se ve modificada por factores tan disímiles como las expectativas de éxito, la forma en que cristalizan las relaciones de poder en el momento y las consecuencias que el individuo o el grupo anticipan de su eventual actitud de sumarse. Los cambios, por lo tanto, no pueden imponerse por la sola voluntad de la autoridad, aunque hayan recibido un sostenido apoyo electoral. Un programa político de transformaciones puede

aprobarse, pero es probable que su puesta en práctica desencadene reacciones concretas, entre los grupos afectados o favorecidos, que obliguen a modificar y corregir el curso escogido inicialmente. Esto, que es de la esencia de una democracia parlamentaria —donde los objetivos se transan hasta que reflejan un consenso amplio— suele olvidarse en regímenes políticos de corte presidencial, donde el poder (aparente) aparece más concentrado en la figura del Jefe del Estado.

Es por ello que un proceso de cambios tiene que tener, en primer lugar, límites que sean acordados consensualmente entre el rango más amplio posible del espectro político. La frontera de los cambios susceptibles es un tema esencial a ser incorporado en los pactos políticos de la futura democracia.

Por otra parte, la concepción misma del cambio debe modificarse sustancialmente. En una sociedad compleja y además democrática, las transformaciones deben ser entendidas como un proceso flexible, que se revisa y corrige permanentemente a la manera de un aprendizaje colectivo.

La lógica de cambio debería alejarse de la idea de suprimir todo el poder del adversario por un acto de fuerza que permita, luego, aplicar la nueva racionalidad que se desea para “después del cambio”. Además de debilitar a la democracia, eso no garantiza la permanencia de los cambios ni mucho menos su manida “irreversibilidad”.

Las transformaciones se garantizan a través de la aplicación persistente y paciente de fuerzas sociales acumuladas en una cierta dirección que se desea. A mayor consenso, más alta la probabilidad de que el resultado final del proceso de cambio se acerque, a posteriori, al objetivo que se tuvo al comenzar. Iniciada la tarea, la persuasión debe entrar a jugar un papel predominante. A través de ella se va atrayendo a los que se sienten inicialmente indecisos o inseguros, e incluso a los que en principio se opusieron.

Desde el punto de vista de la “entropía social”; del desgaste, desorden e incertidumbre que todo cambio inevitablemente conlleva, la consideración estratégica fundamental en una sociedad cansada de transformaciones frustradas es la de

estimular sólo aquellos cambios que tienen una buena probabilidad de éxito. O, de otro modo, aquellos que suscitan un consenso más amplio. O los que, una vez iniciados, tienen un potencial de persuasión más elevado sobre aquellos sectores que al comienzo los resisten.

En una situación de crisis y desintegración nacional, como la que ilustra el caso chileno, los cambios prioritarios tendrían que ser aquellos que fortalezcan el tejido social y que permitan sumar fuerzas inicialmente antagónicas a las tareas nacionales prioritarias.